

En medio de ola de violencia:

Informe de HRW asegura que gobierno y Congreso de Perú debilitan lucha contra crimen

La organización dice que las leyes aprobadas desde 2023 han facilitado que aumenten la criminalidad y los casos de extorsiones.

N. G.

En un lapidario informe, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) acusó a las autoridades peruanas de debilitar las investigaciones contra el crimen organizado y potenciar la inseguridad con la aprobación de varias leyes desde 2023, bajo el gobierno de Dina Boluarte.

La violencia en Perú se ha disparado con el auge de la extorsión, sicariato y minería ilegal, y las medidas de las autoridades han empeorado las cosas, según HRW, que en su informe con 125 entrevistas a funcionarios y activistas reportó que mediante diversas leyes se está debilitando "gravemente" la independencia judicial, mientras la seguridad en Perú se deteriora "drásticamente".

"El Congreso y el gobierno de Boluarte deben revertir el rumbo urgentemente y tomar medidas efectivas para proteger los derechos de todos los peruanos", dijo Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas, al presentar el informe que, entre otras cosas, acusa al Congreso peruano de tomar medidas para socavar la independencia y la capacidad de los tribunales y los fiscales.

El documento también destaca que el número anual de homicidios aumentó casi 137% entre 2018 y 2024, según datos policiales, muchos de ellos a manos de sicarios. "Perú no tiene la tasa más alta de homicidios en la región, pero sí es el país que más



HUMAN RIGHTS WATCH analizó más de 80 leyes aprobadas por el Congreso peruano desde 2023.

HOMICIDIOS

Las cifras oficiales dicen que los homicidios subieron 137% entre 2018 y 2024, cuando llegaron a 2.552, de los cuales la mitad fue a manos de sicarios.

rápido se está deteriorando por el impacto del crimen organizado", dijo Goebertus.

Leyes que quitan "capacidades" al sistema judicial

Medios y autoridades locales alertan hace meses sobre un aumento de la inseguridad en Perú, que se ha visto ejemplificada en los asesinatos de choferes de buses frente a sus pasajeros y en los ataques con explosivos en negocios o domici-

lios que se negaron a pagar grandes sumas a cambio de "protección".

Boluarte —que asumió el poder en diciembre de 2022— relacionó en 2023 el aumento de la inseguridad en el país con la presencia de migrantes y emitió medidas para la regulación y restricción de la llegada de extranjeros, pero HRW tiene una opinión distinta y alerta por cómo las autoridades le han quitado "capacidades" al sistema para enfrentar el crimen.

En su informe, la organización analizó más de 80 leyes aprobadas por el Congreso, pero Goebertus se concentró en una decena que, dijo, muestran de forma clara cómo le han ido quitando "una a una, capacidades" al sistema de justicia "para ser efectivos con el crimen organizado".

Entre las normas recordó aquella que ha "limitado drásticamente" la cooperación eficaz, lo cual debilita los esfuerzos pa-

ra dismantlar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos.

HRW indicó que en el Parlamento, que tiene más de la mitad de sus 130 legisladores con investigaciones por corrupción y otros delitos, se ha modificado la definición de "crimen organizado" en el Código Penal para excluir delitos de corrupción y se han creado obstáculos a los allanamientos a los investigados por criminalidad organizada.

"Lo que tenemos hoy en Perú es sobre todo una profunda anarquía de permitir que el crimen organizado crezca y una absoluta ausencia del Estado de cumplir con su deber de protección y garantía a la ciudadanía", resumió Goebertus.

Entre los 125 entrevistados por HRW no hubo ningún congresista ni miembro del gobierno, incluida Boluarte, y no por falta de esfuerzo: la organización dijo que intentó hablar con ellos, pero no obtuvo respuesta.